

Las experiencias actuales de autogestión en Argentina

Entre la informalidad y la economía social

Un rasgo común de los nuevos movimientos sociales en Argentina es el impulso que brindan al desarrollo de emprendimientos autogestionados. Estos configuran la acción de los trabajadores de empresas recuperadas, constituyen un eje de implantación territorial de varios movimientos «piqueteros», orientan la construcción social de numerosas asambleas barriales. Inicialmente concebidos como una respuesta espontánea a la crisis, esos emprendimientos autogestionados sostienen hoy la utopía de un desarrollo económico alternativo al del mercado capitalista. Allí reside la diferencia de esta nueva economía social con la promovida en los años 90.

Héctor Palomino

Las respuestas sociales al modelo neoliberal

La autogestión productiva constituye hoy un objetivo de acción de diversos movimientos sociales en Argentina. Varios de estos movimientos surgieron como respuesta a la consolidación del «modelo neoliberal» durante los años 90, entre

Héctor Palomino: sociólogo argentino, profesor de Relaciones de Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Palabras clave: economía social, autogestión, neoliberalismo, Argentina.

Nota: Estas breves reflexiones recogen diversos materiales: a) las conclusiones de un documento sobre los movimientos sociales realizado a pedido del PNUD para su Informe de Desarrollo Humano 2002; b) los artículos de Héctor Palomino y Ernesto Pastrana Ernesto: «Argentina ¿después? del

los que se destacan los animados por grupos piqueteros y por trabajadores de «empresas recuperadas». Si se atiende al origen de estas tendencias, puede apreciarse que ambas surgen en la segunda mitad de la década. Los primeros cortes de ruta, hito de origen de los piquetes de desocupados, fueron protagonizados en junio de 1996 por los pobladores de Cutral-Co (provincia de Neuquén), en demanda de soluciones a las carencias productivas y de empleo generadas por el cierre de plantas y establecimientos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la petrolera estatal, que acompañaron su privatización. Asimismo, dentro del universo actual de empresas recuperadas, las experiencias más antiguas surgieron también en 1996. Cabe agregar incluso que en esa época puede fecharse el origen de una de las más originales construcciones sociales de la Argentina: los primeros nodos de las redes de «trueque», esas tramas de intercambio de bienes y servicios al margen de los mercados de la economía formal, se constituyeron precisamente en 1995.

El origen casi simultáneo de estos movimientos y experiencias lleva a interrogarse sobre los factores del contexto que pudieron haber estimulado su surgimiento. Una primera respuesta se vincula con el crecimiento abrupto de la desocupación y la pobreza: el surgimiento de los movimientos de desocupados y de trabajadores de empresas recuperadas coincide con la aparición de altas tasas de desocupación urbana, hasta entonces inéditas en el país. Las tasas de desocupación abierta se multiplicaron por tres en apenas dos años, pasando de 6% a 18% de la población económicamente activa urbana entre 1993 y 1995, y se mantienen por encima de los dos dígitos hasta hoy. Junto con la desocupación se registró un crecimiento incesante de la pobreza: en el Gran Buenos Aires (el único distrito para el que puede reconstruirse una serie de largo plazo del indicador a través de las encuestas oficiales) se registraron 1.800.000 personas por debajo de la línea de pobreza en 1994. Esta fue la cifra más baja de «pobres» en toda la década, que durante los años posteriores creció rápidamente hasta los 3 millones de personas, cifra en la que se «estabilizó» entre 1996 y 1998, a partir de los cuales tendió a crecer de manera incesante hasta llegar a los 6 millones

diluvio: los nuevos movimientos sociales» en Fernando Calderón (ed.): *¿Es sostenible la globalización en América Latina?: Debates con Manuel Castells* (FCE, Santiago de Chile, en prensa); y de H. Palomino: «Colapso institucional y reconstrucción social en Argentina», dossier especial de *Estudios del Trabajo* N° 14, Alast, Buenos Aires, 2002, pp. 109-144; c) los aportes para la discusión de estas ideas del grupo de investigadores sobre «movimientos sociales emergentes» de la Universidad de San Martín, Graciela Di Marco, Susana Méndez, Ramón Altamirano y Mirta Palomino; d) el estudio sobre «el movimiento de empresas recuperadas» realizado en colaboración con los ayudantes de la Cátedra de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que será publicado en el N° 19-20 de *Sociedad*, revista de la Facultad, en mayo de 2003.

de personas registradas en 2002 (que equivalen a casi la mitad de la población del GBA, estimada hoy en 12 millones de personas).

Mientras el crecimiento incesante de la desocupación y la pobreza desbordaba la capacidad estatal para establecer «amortiguadores» de la crisis, en la segunda mitad de los años 90 surgieron respuestas espontáneas en el seno de una sociedad que creía cada vez menos en las bondades del modelo neoliberal para satisfacer las necesidades y demandas sociales. Algunas de esas respuestas se configuraron como movimientos sociales.

Esta experiencia de estancamiento económico parece haber evaporado los sueños argentinos de modernización

El colapso institucional de diciembre de 2001, que llevó a la renuncia del gobierno presidido por Fernando de la Rúa, constituyó el punto de origen de las asambleas barriales, un movimiento espontáneo de ciudadanos que en la Ciudad de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos (partidos del GBA, Mar del Plata, Rosario, Córdoba), impulsó la renovación del sistema político. Rápidamente la evolución de las asambleas barriales llevó a la búsqueda de articulaciones con otros movimientos, en particular los de trabajadores de empresas recuperadas y piqueteros.

Al entroncar el surgimiento en Argentina de las asambleas barriales con las protestas y las diversas experiencias desarrolladas en la segunda mitad de los años 90 resaltan dos aspectos. En primer lugar, que los movimientos contemporáneos no resultan tanto del quiebre del modelo político y económico prevalente, sino que provienen de las respuestas sociales a las consecuencias del funcionamiento de ese modelo, cuyo proceso de instalación se remonta a mediados de los 70, en particular durante la dictadura militar. El segundo aspecto a destacar es una de las grandes consecuencias del modelo: el estancamiento económico prolongado desde 1975 hasta hoy, que contrasta agudamente con la experiencia histórica argentina, país que creció de manera casi ininterrumpida a lo largo de un siglo, entre 1880 y mediados de la década de 1970.

Esta experiencia inédita de un estancamiento económico prolongado en el último cuarto de siglo, parece haber evaporado los sueños argentinos de modernización. De allí que el quiebre y la fragmentación actuales del mundo del trabajo induzcan a una reflexión necesariamente nostálgica sobre el pasado y sobre las instituciones y reglas que sostenían ese mundo, como la que prevalece en la cultura contemporánea del país. Frente a este quiebre de época, los movimientos de asambleas barriales, de desocupados y de trabajadores de empresas re-

cuperadas aparecen como portadores de renovadas esperanzas y como posibilidades de construcción de un futuro. En el seno de una sociedad en la que prevalece el sentimiento de que «el pasado fue mejor» –un signo si no único, al menos distintivo de la sociedad argentina actual en relación con otras–, los militantes y adeptos de estos movimientos se permiten intentar la construcción de un futuro, sobre todo a partir de la elaboración de proyectos productivos y económicos autogestionados. En la base de este impulso se sitúan las necesidades: se trata de proyectos sociales autónomos que buscan respuestas originales a lo que el funcionamiento de la economía de mercado no puede brindar.

Algunas características de los proyectos de autogestión de los nuevos movimientos sociales

Los piquetes. La fuerte atracción ejercida por los piquetes realizados por los movimientos de desocupados se relaciona con su mayor «visibilidad» con respecto a los otros movimientos sociales. La acción de los piquetes aparece actualmente fragmentada en más de una docena de grupos que responden a orientaciones políticas diferentes, algunas entroncadas con partidos políticos de izquierda o con centrales sindicales, otros siguiendo a líderes populistas, otros finalmente privilegiando su autonomía respecto a los partidos. Es decir que una misma denominación, la de «piqueteros», recubre orientaciones muy distintas, lo cual no bloquea su enorme impacto político y, sobre todo mediático.

En esta mayor visibilidad de los movimientos de desocupados inciden sin duda sus dimensiones, ya que según estimaciones de los propios grupos piqueteros, la capacidad de movilización agregada –la de todas las organizaciones que agrupan a desocupados– abarca actualmente cerca de 100.000 personas en todo el país. Esto no es poco, aunque la cifra palidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados. Quizá posiblemente más que sus dimensiones, sea la acción misma de los piquetes la que da cuenta de su visibilidad: los cortes de ruta alcanzan un fuerte e inmediato efecto político, cuyos ecos se multiplican a través de los medios de comunicación. Se trata de acciones «maximalistas» que contrastan, sin embargo, con los fines en principio «minimalistas» que animan las movilizaciones, y que se circunscriben en su mayoría a la obtención de subsidios por desempleo y bolsas de alimentos. Aunque algunos grupos piqueteros se limitan sólo a sostener estos reclamos limitados, otros destinan esos recursos hacia actividades diferentes.

Varios grupos piqueteros desarrollan desde hace varios años actividades de alcance más vasto en el seno de las comunidades en las que están implantados

OBrero, SE SOLICITA:
 que trabaje mucho y que
 sobre poco; que aguante
 a presión, no proteste y
 no se sindicalice. Indispensable
 presentar referencias de
 múltiples anteriores
 al respecto de su
 conducta a las
 autoridades



territorialmente: merenderos y comedores, instalaciones educativas y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los recursos –subsidios y alimentos– obtenidos en las movilizaciones. Es decir que en relación con estos emprendimientos, los cortes de ruta de los piquetes constituyen sólo la punta del *iceberg* de una construcción social mucho más compleja. Las actividades emprendidas en las áreas de implantación territorial de los movimientos de desocupados son particularmente amplias:

desarrollo de huertas comunitarias, venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, etc. Los modelos de organización de estas actividades económicas adquieren formas autogestionarias y cooperativas de la economía social y solidaria, aunque no existen criterios

comunes en los diferentes grupos piqueteros sobre el carácter de estos emprendimientos y sobre su viabilidad y desarrollo futuro.

Ciertos grupos piqueteros, por ejemplo algunos pertenecientes a la coordinadora de desocupados Aníbal Verón –una corriente autónoma de los partidos políticos–, plantean enfoques distributivos radicales sobre el producto de los emprendimientos autogestionados, rechazan la generación de excedentes, o bien los distribuyen entre los productores y sus familias. El fundamento de este enfoque distributivo radical remite a un cuestionamiento más general del capitalismo, identificando la noción de excedente económico con la de plusvalía y

beneficio privado. Esta asimilación conceptual lleva al extremo de impugnar la generación de excedentes en las actividades económicas, en nombre del imperativo moral de rechazo al capitalismo. Aunque esto pueda ser discutible en términos económicos y filosóficos, tiene efectos prácticos considerables en relación con la movilización permanente de los piquetes: dado que los proyectos productivos autogestionados no generan condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducen las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado. Es decir que más allá de su impacto económico, este enfoque distributivo radical tiene efectos importantes en el reforzamiento de la identidad grupal y en el estímulo de la actividad piquetera.

Otros grupos de desocupados, por el contrario, enfocan el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el mediano y largo plazo. Un ejemplo notable al respecto lo constituyen las propuestas del Movimiento de Unidad Popular (MUP), un grupo piquetero implantado en la zona sur del GBA que nuclea una amplia red conformada con familias de desocupados, varias de ellas compuestas por migrantes indígenas (mocovíes) provenientes del centro-norte de la provincia de Santa Fe. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de pequeñas fincas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores desocupados nucleados en el MUP están orientados al desarrollo de emprendimientos autogestionados sustentables. Esto los lleva a promover la generación de excedentes, con el fin de asegurar el mantenimiento y la expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. Esa generación de excedentes no se identifica con el lucro capitalista sino que se destina a fortalecer las relaciones sociales y comunitarias. En relación con estos objetivos, su participación en los piquetes es puramente instrumental, como un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no como un fin en sí mismo. Esto plantea al mismo tiempo una definición de su identidad como «desocupados» previa a la identidad piquetera.

Aunque entre los diferentes grupos piqueteros no llega a instalarse plenamente este debate, aún incipiente, sobre las posibilidades de desarrollo de una nueva economía social y solidaria implantada en redes comunitarias, trascendente con respecto a la economía de mercado, resulta de interés constatar que todas las agrupaciones se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos. Incluso los grupos dependientes de partidos políticos de izquierda, que en un principio rechazaban estas actividades por considerarlas inscritas en un molde «asistencialista», hoy buscan desarrollar emprendimientos productivos.

Los trabajadores de empresas recuperadas. La visibilidad pública del movimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores es reciente. Sin embargo sus modalidades de organización retoman las practicadas hacia principios de los años 80, como respuesta a la primera oleada del proceso de desindustrialización impuesto por la política económica de la dictadura militar. De aquella época datan los esfuerzos puntuales de obreros que pugnaban por reabrir fábricas en distintos puntos del país, pero estos intentos quedaron en el camino porque el nuevo giro de los 90, al reinstalar con fuerza el modelo de apertura comercial importadora, afectó a la industria orientada hacia el mercado interno y obligó al cierre de numerosas empresas, incluyendo aquellas autogestionadas.

Hacia mediados de los 90 comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que buscaban reactivar empresas paralizadas. Estas fábricas presentan varios rasgos comunes. Se trata de empresas afectadas por la importación o por sus dificultades de exportación (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etc.), que se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo traducida en reducciones de sueldos y salarios, el pago en vales, falta de cumplimiento empresario de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, etc. La «recuperación» de las empresas supone la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores toman a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes, lo que les asegura un cierto capital de trabajo, y fijan una retribución mínima para su trabajo consistente en retiros periódicos equivalentes a un sueldo mínimo, a veces combinados con pagos en especie o mercaderías.

En la mayoría de las empresas recuperadas se constata al principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial es posible que los propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, y van desde las cooperativas hasta las sociedades anónimas, aunque no se agotan en ellas, ya que en algunas empresas recuperadas recientemente ha surgido la demanda de nuevas figuras, como la de «estatización con control obrero» o con «administración obrera», o la de «empresa social». En cualquiera de estas formas los trabajadores buscan tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo. Esto afecta también el vínculo con el sindicato, por cuanto al hacerse cargo de la responsabilidad en la gestión abren al mismo tiempo una instancia de redefinición del vínculo de aquél con los trabajadores.

Aun cuando las empresas recuperadas por sus trabajadores son percibidas como un movimiento, de hecho existen varias corrientes, actores y organizaciones que inciden en su desarrollo. Estas corrientes se consolidaron y renovaron a partir del colapso institucional de diciembre de 2001, cuando el movimiento suscitó una gran expectativa: en medio de la crisis económica, la recuperación de empresas por sus trabajadores fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad. Las distintas organiza-

La recuperación de empresas constituye un ejemplo de la lucha por la ampliación de los derechos sociales

ciones del movimiento proporcionan asesoría legal, técnica y política para las empresas recuperadas y, al recoger las diversas experiencias, reproducen y difunden la exploración y el aprendizaje de las nuevas formas de la economía social y solidaria.

Las empresas recuperadas que se ponen en funcionamiento con diferentes modalidades de gestión de los trabajadores, apoyadas por otros movimientos sociales, muestran el replanteo del derecho al trabajo y el de la propiedad privada, en particular el de su jerarquía relativa en esta época de crisis económica. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegia el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como principal el derecho al trabajo y ponen en discusión la función social de la propiedad. Esto no constituye una discusión puramente retórica, sino que se traduce en la instalación de procedimientos jurídicos inéditos, que anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.

La recuperación de empresas constituye un ejemplo de la lucha por la ampliación de los derechos sociales, pero al mismo tiempo cabe reflexionar acerca del impacto e influencia de este movimiento en la sociedad, más allá de sus dimensiones intrínsecas. En el caso de las empresas recuperadas en particular, la distancia entre las dimensiones limitadas del movimiento y sus efectos culturales y sociales es inmensa. Unas pocas empresas, que superan apenas el centenar, dispersas en el territorio, diferentes por sus actividades y por las tradiciones políticas de los poco más de 8.000 trabajadores que agrupan, ponen en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas unidades productivas, los trabajadores bloquean la herramienta privilegiada de los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no pueden apelar a su recurso de última instancia, el cierre del establecimiento (huelga de inversiones o *lock out*) como instrumento de presión sobre los trabajadores. Estos, ante la amenaza, pueden contestar ahora con la posibilidad de ocupar y

autogestionar las empresas en dificultades, de allí que no habría que «medir» la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión relativa intrínseca –reducida–, sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.

Las asambleas barriales. La respuesta más novedosa de quienes, en palabras de Albert Hirschman, optaron por la «voz» y la protesta ante el colapso institucional de 2001, fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, varios partidos del Conurbano y en otras ciudades del interior. La mirada positiva hacia las asambleas barriales es sostenida por quienes descubren en ellas la capacidad de autoorganización de la sociedad argentina, la capacidad de construir y de regenerar lazos sociales. Estas capacidades pueden ser vistas desde la cúspide del sistema político como un factor de inestabilidad, precisamente por la dificultad de controlar y de canalizar las movilizaciones dentro del esquema institucional vigente. Pero al mismo tiempo la autoorganización parece indicar claramente el límite de la caída. Aun suponiendo que el haber tocado fondo puede convertirse en un rebote interminable por inercia, sin posibilidades de remontar la cuesta al menos en el corto plazo, esas formas de gestión y la movilización social indicarían que se ha llegado a un límite.

El contraste entre estas nuevas formas de apropiación del espacio público en la ciudad, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa que cuestiona las formas de representación vigentes de la democracia delegativa, contrasta vivamente con la privatización del espacio público ocurrida en los años 90. Frente a ellos las nuevas modalidades de protesta social proponen otras formas de ocupación de ese espacio y también de acceso a los servicios. En las asambleas barriales las medidas de acción directa como cacerolazos y cortes de calles vinculadas con cuestiones políticas generales y de reclamos a los poderes públicos, se combinan y se establecen en tensión con cuestiones locales y necesidades de supervivencia.

Esto puede observarse en las micropropuestas de los barrios, vinculadas con la provisión de insumos para los centros sanitarios u hospitales locales, con compras comunitarias o con la implantación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos, bolsas de trabajo para desocupados, etc. Cada vez más, a lo largo de 2002 y en lo que va de 2003, la actividad de las asambleas barriales se fue volcando a la generación de emprendimientos productivos autónomos. Este aspecto resulta clave para fijar el horizonte de acción de las asambleas barriales: sus objetivos trascienden el plano político-institucional y apuntan a intervenir

De paradigma alternativo a la intervención estatal, ahora la economía social comienza a ser concebida como paradigma alternativo a la economía de mercado

también en el plano económico y social. Esto permite comprender una de las orientaciones centrales del movimiento asambleario, tendiente a desarrollar diversas experiencias de una nueva economía social y solidaria, y elaborar respuestas a las crisis de los sistemas educativo, de salud, etc. De allí la novedad que aportan las asambleas, ya que lejos de circunscribir su acción a focos «temáticos» restringidos, se orientan por fines amplios (a veces difusos para el observador externo), tanto como los fines de «cambiar la vida» enunciados por muchos asambleístas.

Las asambleas barriales aportan un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria en Argentina: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios. Este factor está presente también en los emprendimientos autogestionados de empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros. Pero en éstos priman sobre todo las necesidades de la población, mientras que en las asambleas los emprendimientos autogestionados son el producto de una elección ideológica previa. Esta politización se acentúa en la exploración de articulaciones concretas de las asambleas con los otros movimientos sociales, no solo como defensa de las posiciones conquistadas –como p. ej. la solidaridad activa con las empresas recuperadas–, sino como una redefinición alternativa de las actividades económicas.

La nueva economía social y solidaria

La politización, tal como es promovida en los nuevos movimientos sociales, constituye una diferencia clave con los desarrollos de la economía social durante los años 90 en Argentina. La novedad del surgimiento de formas autogestionarias y su fuerte expansión reciente se relacionan obviamente con el contexto de crisis del denominado modelo neoliberal vigente en los 90 y colapsado en 2001.

En el contexto prevaeciente en la década pasada, las actividades de la economía social aparecían como complementarias del retiro del Estado de la actividad económica, y fueron impulsadas por los organismos multilaterales que alentaban su desarrollo al mismo tiempo que la instalación de mercados que sustituyeran la prestación estatal de servicios. El Bando Interamericano de De-

los movimientos sociales, que reflejan la emergencia de nuevos valores con respecto a los prevalecientes en los años 90: igualitarismo, solidaridad, cooperación, como opuestos al individualismo egoísta del empresarialismo predominante en la pasada década. El factor contracultural (con respecto a los 90, pero no tan sólo) es tan fuerte que lleva a equívocos en la comprensión de la nueva economía social. En ésta todos los componentes económicos (producción, distribución, consumo) se tornan esencialmente políticos: es materia de discusión abierta entre sus miembros, se vincula con necesidades de los participantes, se generan en el seno de movimientos políticos. Esta reorientación choca también con la concepción tradicional de actividades en las que las necesidades eran resueltas «automáticamente» en la esfera económica a través del salario articulado, en el periodo previo a la devastación neoliberal, con servicios sociales –de salud o previsionales. En la nueva economía social el componente político es esencial.

En este nuevo contexto la economía social aparece como un concepto que abarca el desarrollo de actividades de trabajo en un espacio público, en el que la retribución de los agentes no es necesariamente, ni tan sólo, de carácter monetario. Las actividades de la economía social son públicas y se diferencian de las del espacio privado correspondiente al mercado o la economía doméstica. También se diferencian de las actividades estatales ya que si bien éstas son públicas, la retribución de los agentes estatales es centralmente salarial (monetaria).

En los emprendimientos impulsados por grupos de desocupados organizados en movimientos piqueteros, por asambleas barriales y por trabajadores de empresas recuperadas, el desarrollo de capacidades se manifiesta en las propias actividades y la sinergia se deriva, casi automáticamente, de los objetivos de articulación tanto de las experiencias afines, como de la instalación de canales transversales entre los movimientos. El respeto se deriva de la regla de horizontalidad para la vinculación entre los miembros, la solidaridad constituye a la vez un objetivo de los movimientos y una condición de existencia de los mismos, la confianza deriva de la propia pertenencia. Obviamente, en cada experiencia particular se detectan diferencias dadas por el grado de participación e involucramiento por un lado, y políticas por el otro.

La economía social y la nueva informalidad

El contexto actual de desarrollo de los nuevos enfoques de la economía social en Argentina se caracteriza por el crecimiento del desempleo y de la pobreza. Cierto es que las respuestas aportadas por los economistas convencionales (or-

todoxos o keynesianos) a estos problemas son en cierto sentido canónicas; para ellos, por ejemplo, el desempleo sólo podrá superarse en la medida del crecimiento económico y, por lo tanto, aun cuando se deje atrás la crisis en el corto o mediano plazo, sólo a muy largo plazo la economía argentina remontará las elevadas tasas de desocupación abierta. Estas respuestas distan considerablemente de las expectativas sociales, por eso y en primer lugar, los movimientos sociales encarar los emprendimientos autogestionados desde las necesidades inmediatas, como mecanismos de subsistencia que responden a las urgencias de la crisis, más allá de que postulen como meta su articulación en un nuevo paradigma económico.

Pero además de la pobreza y la desocupación, un rasgo notorio del contexto económico y social contemporáneo es la enorme extensión de la informalidad impulsada por la crisis. Las plazas y parques de los grandes centros urbanos del país se pueblan cotidianamente de gente que acude allí a colocar el producto de su trabajo, o incluso sus propias pertenencias, en puestos de venta precarios. La constitución de numerosas ferias informales es la que otorga al paisaje urbano de los grandes centros urbanos una notable similitud con el de otros países de América Latina. Estas notas de valor impresionista son corroboradas por los datos recientes aportados por las encuestas de hogares: en mayo de 2002, hace sólo un año, 60% de los ocupados padecía algún tipo de precariedad en su inserción laboral.

Esta «latinoamericanización» creciente de Argentina no está exenta, sin embargo, de cierta especificidad: si por un lado la creciente informalización de la economía tiende a alinearla con buena parte del resto de los países de la región, la enorme tasa de desocupación abierta que persiste desde hace nueve años por encima de los dos dígitos, sigue emparentando nuestro mercado de trabajo con el de los países centrales. Es como si Argentina combinara, con la crisis, los dos tipos de mecanismos de ajuste del mercado de trabajo, o sea el ajuste por desocupación –como en Europa, digamos– y el ajuste por informalidad –como en América Latina. Algo que se parece a una sumatoria de problemas.

En la medida en que no todas las formas de la economía social están legitimadas, su desarrollo no llega a diferenciarse plenamente de la difusión de la informalidad, e incluso ésta parece favorecer la difusión de la economía social, al menos en el corto plazo. Sin embargo sería necesario distinguir la economía social de la economía informal, sobre todo de las definiciones de la informalidad que hacen de ésta una suerte de perversión de la economía formal frente a la cual las políticas estatales oscilan entre criminalizarla, canalizarla o tolerarla.

Conclusiones

Dado que la economía social cuenta con una legitimidad creciente, aun cuando comparta algunas de las características de la economía informal, la recurrencia a una «economía social y solidaria», aparece cada vez más como una nueva utopía de desarrollo, capaz de resolver lo que los esquemas clásicos de la economía no pueden solucionar. Más allá de su carácter (utópico o no), lo que interesa es que los actores sociales en Argentina parecen suscribir en parte esta utopía, menos por su capacidad para imaginarse un «nuevo mundo feliz» que por estar sometidos a la urgencia de las necesidades: para quienes están sumergidos en la pobreza y el desempleo, la autogestión asociada aparece como un mecanismo capaz de resolver de modo eficaz la provisión de alimentos y el uso de su fuerza de trabajo. Esta urgencia se convierte en un motor de las experiencias de autogestión: los obreros que recuperan fábricas abandonadas por sus patrones, lo hacen porque no encuentran trabajo en otra parte; los desocupados que se incorporan a emprendimientos autogestionados que impulsan algunos movimientos piqueteros, lo hacen por su condición y para proveerse el sustento.

En síntesis, la organización autónoma de los agentes de la nueva economía social difiere de la registrada en los años 90 ante el retiro del Estado. La nueva economía social puede ser comprendida atendiendo, en especial, al carácter esencialmente político que incorpora a las actividades económicas, y este carácter no debería ser ajeno a la reconstrucción del Estado en Argentina. En última instancia la nueva economía social interpela a los funcionarios en términos de las funciones y objetivos estatales: *los obliga a hacer lo que deben hacer* en relación con la sociedad, desplazándolos del mero cumplimiento de rutinas burocráticas. Es decir, indica a los funcionarios cómo y dónde aplicar los recursos estatales, para promover el desarrollo de la nueva economía social en dos sentidos: canalizando los recursos y generando nuevas formas jurídicas y sociales que la consoliden.

Aquí debe tenerse en cuenta que en Argentina las formas de organización de los agentes económicos se limita a la empresa privada, la cooperativa o mutual y la asociación civil. Estas formas jurídicas parecen hoy día limitadas para contener las fuerzas solidarias liberadas por la nueva economía social. No se trata de negar las formas existentes, sino de encontrar nuevas figuras jurídico-organizativas capaces de potenciar el desarrollo de la economía social.